

INFORME AL “PRIMER BORRADOR DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES” ELABORADO POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

**I
COMENTARIOS DE CARÁCTER GENERAL**

Se trata, sin duda, de una primera aproximación al Reglamento de la Ley de Acceso, que ni siquiera pretende ser un texto completo: no está desarrollado el art. 9 (marco general de los convenios) y hay cuestiones que carecen por completo de regulación, como la de la financiación de los cursos de formación y, en relación con ésta, la de la posibilidad de becas y ayudas.

También plantea, en algún caso, posibles problemas de adecuación a la Ley 34/2006, de 30 de octubre, que trata de desarrollar, como sucede con la duración del “master” en el art. 3, cifrada en 120 créditos, de los que al menos 40 serán dedicados a prácticas externas, lo que no se compadece bien con los arts. 4.3 y 6.1 de la Ley que, si bien no son preceptos de fácil interpretación, parece que permitan entender que la duración global sería o bien de 120 créditos, repartidos por mitades (60 y 60) entre los cursos y las prácticas externas, o bien de 90 créditos, distribuidos en 60 de cursos y 30 de prácticas externas.

En este sentido el borrador de Reglamento carece además de definición de los créditos con los que mide la duración de los cursos y de las prácticas, aunque parece presuponerse que se trata de créditos ECTS, de entre 25 y 30 horas de trabajo por crédito, tal y como resulta del RD 1125/2000.

Con carácter general, tal y como se irá viendo en los distintos artículos, el borrador de Reglamento no parece suficientemente adaptado a los conceptos y metodología del proceso de Bolonia y correría el riesgo de convertir la formación para el acceso a la profesión de abogado o procurador en un complemento del grado, algo equivalente al quinto año suprimido en el grado respecto de las licenciaturas clásicas en Derecho, y no en una auténtica formación práctica que tome en consideración las exigencias de deontología y ética profesional, cada vez más importantes, y el amplio campo de las profesiones jurídicas que se inscriben bajo la rúbrica general de la abogacía en la actualidad, primando una visión de esta profesión excesivamente ligada a lo contencioso y a un elenco de materias relacionadas con los distintos órdenes jurisdiccionales, antes que a la forma de la prestación profesional.

Esa misma restricción en el horizonte formativo es apreciable en el régimen de la evaluación final y de las pruebas que la componen, siendo ésta una inclinación muy relevante para la efectividad práctica de un sistema que puede acabar orientándose en la superación de esa evaluación más que en el proceso formativo previo.

Las principales ausencias en el texto, al margen de lo expuesto y sin perjuicio de lo comentado en los diversos artículos serían las relativas a:

- La existencia de formas muy diversas de ejercicio de la abogacía, distintas de la abogacía contenciosa ante Tribunales.
- La realidad social de las especializaciones (por materias, en sentido tradicional, y órdenes jurisdiccionales, por formas de prestación profesional y de organización) tanto en los cursos de formación, como en las prácticas externas y en la prueba de evaluación.
- La total ausencia de consideración del ingrediente internacional en el ejercicio de la profesión de abogado y, por tanto, en su formación.
- La circunscripción de la previsión de convalidaciones a situaciones funcionariales.
- La no contemplación de la estructura autonómica del Estado y, en el orden profesional, de los Consejos de Colegios de Abogados autonómicos (disposición adicional 6ª de la Ley de Acceso)

El presente informe, elaborado por la Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía Española se ha querido centrar en aquellas cuestiones que podrían denominarse sustantivas del proceso formativo regulado, antes que en las estrictamente procedimentales respecto de las cuales, además, la regulación contenida en el borrador parece, en general, bastante satisfactoria.

II

COMENTARIOS Y PROPUESTAS DE REDACCIÓN ALTERNATIVA DE DETERMINADOS ARTÍCULOS

Artículo 1. Grado en Derecho.

Es una mera aplicación al grado en Derecho del art. 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Ningún comentario o alternativa de redacción.

Artículo 2. Carácter de la formación universitaria de posgrado.

La afirmación de que la formación a que se refiere el art. 4 de la Ley “tendrá el carácter de master oficial del artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre”, es equívoca: no existen masters “oficiales”, sino “títulos oficiales de master” (ex art. 37 de la LO 6/2001, de 29 de diciembre), debiendo recordarse que también las universidades privadas pueden expedir títulos de este tipo.

En cualquier caso, no puede entenderse que sólo sea título oficial de master en Derecho el que cumpla las condiciones del art. 2.2 de este borrador, porque se vulneraría la autonomía universitaria, sino que tales condiciones sólo serán exigibles para aquellos títulos que habiliten el acceso a la abogacía o a la procuraduría.

Ningún otro comentario o alternativa.

Artículo 3. Duración.

Es difícil cohonestar este artículo con los arts. 4.3 y 6.1 de la Ley de Acceso, que más parecen diseñar un sistema formativo o bien de 90 créditos en total, correspondiendo 30 a las prácticas externas, o de 120 créditos en total, correspondiendo 60 a las prácticas externas.

Aunque en el seno de la Comisión de Formación del CGAE se mantuvieron las dos posturas (los 120 créditos totales parecían, en general, una duración razonable para el conjunto del proceso formativo, pero si la distribución de los créditos entre los cursos y las prácticas externas fuera paritaria, 60/60, se entendería preferible la proporción 60/30, compatible con los arts. 4.3 y 6.1 de la Ley, mientras que la distribución 80/40 que parece implícita en el borrador, no sería congruente con la Ley.

Sería seguramente deseable mayor flexibilidad y que cuando se establece un número de créditos se considere como un mínimo, o se fije un mínimo y un máximo.

En cualquier caso, es necesaria la identificación de los créditos reseñados en este precepto como créditos europeos (ECTS) en el sentido del art. 3 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre.

Por otro lado, la prescripción del apartado 2 de que “al menos diez horas por crédito tendrán carácter presencial, en formación lectiva o de prácticas, según corresponda, no es fácilmente inteligible sin la identificación de los créditos como créditos ECTS y, hecha esta identificación, dicha exigencia tampoco parece congruente con la naturaleza y régimen de estos créditos en el citado RD 1125/2003. De igual modo parece difícil proyectar esa exigencia, de forma igualitaria, a los cursos y a las prácticas externas, donde el número de horas de carácter presencial tendría que ser muy superior a 10 horas por crédito y, correlativamente, un remanente de entre 15 y 20 horas por crédito de práctica externa no presencial (ex art. 4.5 del R D 1125/2003) sería desproporcionadamente alto. Se propone la supresión de esa exigencia, que no encaja con la alta dosis de generalidad del precepto, que tampoco incluye, por ejemplo, referencia alguna a la formación on line y a su ponderación.

Una propuesta alternativa de redacción, considerando lo anterior, podría ser la siguiente:

“Artículo 3. Duración.

1. El master tendrá 90 créditos, entendidos en el sentido del art. 3 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos.

2. De estos 90 créditos, 30 créditos serán dedicados a prácticas externas con los requisitos regulados en la Ley y en este Reglamento”.

Artículo 4. Contenido.

La Orden conjunta de los Ministerios de Ciencia e Innovación y Justicia que se menciona en el apartado 1 de este artículo debería ir precedida del informe preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo General de la Abogacía Española. No sólo porque responde a la lógica interna del proceso normativo diseñado en la Ley sino por coherencia interna, ya que en el apartado 2 se contempla la actualización cada dos años del “plan de estudios” resultante de esa Orden con informe preceptivo del CGAE: no tiene sentido que se exija para la actualización y no para el establecimiento.

La concepción de un master en el que la parte formativa no práctica tenga más de un 60% de “materias obligatorias” (50 créditos sobre los 80 que resultan de restar los 40 de prácticas externas a los 120 totales) parece algo excesivo en la proporción y excesivo en la rigidez.

No hay ninguna referencia a la posibilidad de “materias optativas” (tampoco en la evaluación contemplada en el art. 26), a diferencia del art. 15.2 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, para los másters, siendo así que lo optativo puede ser diferente de lo no obligatorio.

Los propios conceptos empleados (“materias” y “obligatorias”) poseen una connotación estática que más parece propia de un curso adicional a los del grado que de un master que habilite para el ejercicio profesional, lo que se refuerza con la posterior referencia a estas materias obligatorias en los apartados 1 y 3 del art. 26 sobre la evaluación final.

El precepto también podría ser incongruente con el artículo 35 de la LO 6/2001, que habla de “directrices y condiciones” a establecer por el Gobierno y con el artículo 15.4 del RD 1393/2007, que habla sólo de condiciones a establecer por el Gobierno para que se adecúen a ella los correspondientes planes de estudios.

No se habla sin embargo de objetivos de formación, docentes, competencias y habilidades que es lo que resulta del proceso de Bolonia y, puestos a mencionar materias, nada se dice ni aquí ni en ningún lugar del borrador de Reglamento de la deontología o ética profesional que se inscribe plenamente en el tipo de exigencias necesarias del proceso formativo, siendo ésta una omisión que sería absolutamente imprescindible remediar en el texto del Reglamento. De hecho la deontología profesional no es un área, materia o competencia más entre otras, sino algo absolutamente fundamental en la trascendencia social de la abogacía y, por tanto, en la formación para el acceso a esta profesión.

Se adjunta Anexo con el elenco de Objetivos de Formación (conocimientos, habilidades, actitudes) por Áreas (deontología, penal, civil, mercantil, administrativo, tributario, laboral y de seguridad social, materias instrumentales y objetivos transversales), aprobado por la Comisión de Formación del CGAE para la homologación de las Escuelas de Práctica Jurídica y las Prácticas de Iniciación a la Abogacía.

La convalidación de hasta 50 créditos de 80 (parece que deben excluirse aquí las prácticas externas), para quien haya superado total o parcialmente un proceso selectivo para el acceso a la función pública, se estima excesiva, incongruente con el contenido mínimo obligatorio de 50 créditos (si hubiera que sumar los 50 de materias obligatorias y los 50 convalidados se superarían ampliamente los 80) y, seguramente, también incoherente con el tipo y la dimensión práctica que debería primar en la formación de acceso, bastante alejada de la “preparación de oposiciones”.

Frente a esa convalidación no hay ninguna otra prevista, por realizaciones de cursos de formación en Colegios de Abogados, Escuelas de Práctica Jurídica o Universidades, que pueden quedar dentro de esta clase de formación, incluso dentro del margen de 30 créditos en materias no obligatorias que resultan del texto.

Se propone el siguiente texto:

“Artículo 4. Contenido.

- 1. El máster deberá alcanzar los objetivos de formación que se establezcan en la Orden conjunta de los Ministerios de Ciencia e Innovación y de Justicia, previo Informe del Consejo General de la Abogacía Española, de conformidad con las condiciones fijadas por el Gobierno.*
- 2. El contenido de esta Orden será actualizada cada dos años y requerirá informe preceptivo del Consejo General de la Abogacía.*
- 3. Los objetivos básicos del máster comprenderán, en todo caso, el conocimiento de las normas de Deontología y principios de Ética Profesional y la adquisición a través del estudio práctico de las materias jurídicas seleccionadas por cada centro docente y de las competencias y habilidades profesionales para el ejercicio de la abogacía.*
- 4. La universidad podrá contemplar en su plan de estudios la convalidación justificada de hasta 30 créditos en el caso de que quien curse el máster acredite haber realizado un período de formación para la superación de un proceso selectivo para el acceso a la función pública en los casos señalados en la disposición adicional tercera de la Ley. El número de créditos convalidados podrá modularse en función de que se hayan superado o no alguno algunos de los ejercicios del proceso selectivo. Dicha convalidación no podrá afectar a los créditos correspondientes a las prácticas externas.”*

Adicionalmente, y sobre todo si se entiende que no es de aplicación a estos másters lo dispuesto en el art. 15.3 del Real Decreto 1393/2007 sobre evaluación final (vid. infra comentario al art. 8), debería añadirse a este art. 5 un párrafo equivalente al del art. 7 e) de modo que el programa del máster incluya “*procedimientos suficientes de acreditación de la asistencia y aprovechamiento de la formación recibida*”.

Artículo 5. Cualificación del profesorado.

[En relación con los Artículos 7 b) y 14]

Carece de sentido la reserva en favor del Colegio Profesional con el que se celebre el convenio de que la mitad del profesorado deba ser Abogado colegiado como ejerciente en dicho Colegio, y sólo en otros si así se acordase en el convenio, que podría considerarse como una restricción a la libre prestación de servicios prohibida por el art. 49 del Tratado CE, o al libre establecimiento del art. 43.

Por homogeneidad con el art. 13.2 y porque la antigüedad mínima de 3 años parece reducida, se propone subirla a 5 años.

No se prevé en absoluto que la condición de profesor pueda tenerla cualquier Abogado de un Estado miembro en la Unión Europea colegiado en su País de origen, ni se ofrece la posibilidad de cursar el período de formación en parte o en su totalidad en otro Estado miembro.

La posibilidad de que al menos la mitad del profesorado puedan ser funcionarios de los referidos en la disposición adicional tercera de la Ley parece contradecir el art. 4.3 de la propia Ley que exige “que quede garantizada la presencia de la mitad, al menos, de profesionales colegiados ejercientes”.

Se propone la siguiente alternativa:

“Artículo 5. Cualificación del profesorado.

Al menos la mitad del profesorado deberá ser Abogado que haya estado colegiado como ejerciente durante un plazo mínimo de cinco años, en España o en el extranjero. Los profesores que sean funcionarios que reúnan los requisitos del apartado segundo de la disposición adicional tercera de la Ley no computarán a efectos de la determinación del número de profesores que deban ser abogados.”

Estas cualificaciones deben ponerse en relación con las del artículo 7, cuyo apartado b) introduce también la restricción de que al menos la mitad de los profesores que impartan asignaturas obligatorias en los cursos de formación impartidos en una Escuela de Práctica Jurídica homologada, por convenio con una universidad, “sean profesores titulares o catedráticos de dicha universidad, o de otras, si así se contemplase en el convenio”, lo cual también es restrictivo y difícil de justificar en términos de autonomía universitaria y de la diversidad de las situaciones de los profesores en las universidades públicas y privadas. Además, tal exigencia no está en el art. 5 para los Másteres oficiales y no compara bien con el

art. 23 del RD 1393/2007 que, para los cursos de doctorado, sólo exige la condición de doctor.

Se propone la sustitución del párrafo b) del artículo 7 del borrador (“requisitos de formación”) por el siguiente:

“b) Que se acredite la celebración de un convenio con una universidad pública o privada, española o extranjera”.

Por último, la cualificación del profesorado del artículo 5 debe ponerse en relación también con el artículo 14 en materia de “designación de los tutores”, en cuyos dos apartados aparece una restricción todavía más fuerte: que los tutores de las prácticas de los cursos organizados por las Escuelas de Práctica Jurídica se realicen por el propio Colegio de Abogados “entre los Abogados adscritos al mismo” (apartado 2) y que los tutores de las prácticas del master universitario se elijan por la universidad organizadora “sobre el listado de abogados proporcionado por el Colegio de Abogados con el que tenga suscrito el convenio”, lo que implica la pertenencia de los tutores a dicho Colegio, posiblemente en contra de los principios de libertad de establecimiento y circulación del derecho comunitario antes mencionados.

Se propone el siguiente texto:

“Artículo 14. Designación de los tutores.

1. La designación de los tutores de las prácticas del master universitario, corresponde a la universidad organizadora del curso de formación de acuerdo con el procedimiento que se haya convenido con el Colegio de Abogados.

2. La designación de los tutores de las prácticas de los cursos de formación organizados por las escuelas de práctica jurídica se organizará por el propio Colegio de Abogados”.

Artículo 6. Habilitación para la evaluación.

No se encuentra el fundamento -ni el precedente- de que la superación del master, a efectos de habilitar para presentarse a la evaluación, caduque a los cinco años. Se propone la supresión de esta limitación:

“Artículo 6. Habilitación para la evaluación.

La superación del master, conforme a los procedimientos de educación que este prevea de acuerdo con la normativa educativa en vigor, habilitará para presentarse a la habilitación antes referida”.

Artículo 7. Requisitos de la formación.

Ningún comentario o propuesta alternativa adicionales a los ya expuestos en relación con el artículo 5.

Artículo 8. Habilitación para la evaluación.

Remisión al comentario del artículo 6, con la siguiente propuesta de texto:

“Artículo 8. Habilitación para la evaluación.

La superación del curso de formación de conformidad con los procedimientos de evaluación que lo regulen, habilitará para presentarse a la evaluación regulada en el artículo 7”.

Ello no obstante, se suscita la duda acerca de si la remisión a “los procedimientos de evaluación que regulen” el curso de formación, si se considera como un máster, obligará a superar una prueba final propia del curso y previa a la evaluación de este Reglamento en los términos del art. 15.3 del R D 1393/2007 (las enseñanzas universitarias oficiales de master “concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de master, que tendrá entre 6 y 30 créditos”) , o si esta evaluación sustituye a aquella prueba final, en cuyo caso el problema podría consistir en que los estudiantes que cursaran el master pero no aprobaran la evaluación final, tampoco tendrían un título de master distinto a los que habilitan para el acceso a la profesión. Parece lo lógico diferenciar el master de acceso a la profesión de abogado de los demás másters universitarios, excluyendo, por tanto, la prueba final indicada cuyos créditos además (de 6 a 30) tendrían que restarse de la formación de acceso, lo que no parece que encaje en la ratio de la Ley y, por tanto, tampoco en este Reglamento..

Artículo 9. Marco general.

Pendiente de desarrollar lo relativo a requisitos generales del Convenio.

Artículo 10. Obligación de convenir.

El texto del borrador parece estar basado en la desconfianza hacia la actuación de Colegios profesionales y Universidades; pero la “obligación de convenir” para partes concretas (y respecto de una concreta propuesta de convenio), más allá de la necesidad de que se celebre un convenio, tal y como aparece en la Ley de Acceso, es más que discutible por incongruente con la propia naturaleza del convenio y con la autonomía de Universidades y Colegios Profesionales.

Todavía se aprecia mayor contradicción en el procedimiento del apartado 2 para imponer un convenio concreto a una o más partes del mismo.

Se propone su supresión.

Artículo 11. Enseñanzas conjuntas.

Se trata de uno de los preceptos más importantes del borrador de Reglamento, que responde plenamente al principio inspirador de la Ley 34/2006, de Acceso, conducente a la articulación conjunta de las posiciones de Universidades y Colegios Profesionales, en este caso a través de las Escuelas de Práctica Jurídica. Precisamente por ello se encarece tratar de mantener, como está en el borrador de Reglamento, una regulación muy flexible que favorezca la celebración de este tipo de convenios.

No queda clara la relación con la denominación de título exigida por el art. 10 del Real Decreto 1393/2007 (que sea “*Máster Universitario ... por la Universidad ...*”) y si estos cursos pueden ser o no másters oficiales (“*... por la Universidad ... y la Escuela de Práctica Jurídica ...*”), como parece que debería. Se derogaría la Orden ECI/2514/2007, de 13 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales de Máster y Doctor.

Cabe plantear que estos másters, al no ser únicamente de las Universidades, permitan actualizar la cláusula “en su caso” que aparece, por referencia al régimen de precios públicos en el art. 4.1 de la Ley de Acceso, excluyendo la aplicación del art. 7 del Real Decreto 1393/2007 en esta misma materia.

Se propone la siguiente alternativa:

Artículo 11. Enseñanzas conjuntas.

Las Universidades y las Escuelas de Práctica Jurídica podrán acordar por convenio celebrar cursos en colaboración, con título expedido conjuntamente por ambos centros que podrá

tener la consideración de master oficial del artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, siempre que éstos se acomoden a lo previsto en el artículo 5 y el capítulo segundo.

Artículo 12. Prácticas externas.

No se define en ningún lugar que se entiende por práctica “externa”. La circunscripción resultante del siguiente art. 13, para su realización (únicamente) en despachos de abogados, parece excesiva (vid infra).

Tal vez podrían considerarse “externas”, al menos para los másters universitarios, las prácticas en Escuelas de Práctica Jurídica y en Colegios de Abogados, donde pueden llevarse a cabo simulaciones y otro ejercicios con abogados en ejercicio como tutores en los términos del siguiente artículo de alto valor formativo; especialmente si se tiene en cuenta la dificultad práctica (que el propio Borrador de Reglamento parece reconocer) en cubrir la totalidad de la demanda.

Ningún otro comentario o propuesta alternativa.

Artículo 13. Tutores.

Hay un excesiva inclinación hacia la abogacía contenciosa ante Tribunales. Las prácticas deberían poder realizarse en instituciones distintas de despachos (Administración Pública, empresas, fundaciones, ONG) acreditadas por los Colegios de Abogados.

Se menciona a los abogados titulares de despachos y a quienes ejerzan la abogacía por cuenta ajena, pero no a los socios en los despachos colectivos.

La obligación para los colegios de abogados de que en su ámbito territorial puedan hacerse todas las prácticas, y la de los abogados de ser tutores, parecen muy difíciles de justificar y no tienen en cuenta la heterogeneidad de colegios existentes.

No tiene sentido excluir de su capacidad para ser tutores a los abogados que prestan su función profesional fuera de despachos de abogados en empresas o instituciones de la sociedad civil.

No se tiene en cuenta la existencia de sociedades profesionales como prestadoras de la actividad profesional.

Se propone la siguiente alternativa, tratando de ser menos reglamentista:

“Artículo 13. Tutores

1.- Los tutores de las prácticas deberán ser abogados en ejercicio, que hayan estado colegiados como tales durante un mínimo de cinco años.

2.- Para completar las prácticas de los alumnos un tutor podrá recabar la colaboración de otros abogados o profesionales del Derecho”.

Artículo 14. Designación de tutores.

Parece un tanto contradictorio (y contrario a la autonomía negocial de las partes) que la designación de los tutores deba hacerla (¿siempre?) la Universidad, cuando el convenio con un Colegio de Abogados es preceptivo y ha de ser el Colegio el que facilite la lista de (posibles) tutores. Lo lógico es que la designación se haga conforme a lo convenido, lo que puede implicar una intervención del Colegio mayor que la de facilitar un listado de colegiados.

Remisión al comentario y propuesta alternativa de redacción relacionada con el artículo 5.

Artículo 15. Programa de prácticas.

No parece realista, en función de la especialización de los abogados y los despachos, exigir que las prácticas deban extenderse a todas las “materias obligatorias” en la terminología del borrador de Reglamento.

La referencia en el apartado 1 a “materias objeto de estudio *teórico* comprendidas en la orden conjunta ” es poco afortunada, tratándose de una formación para el acceso a una profesión de orientación necesariamente práctica. Debe suprimirse

La asistencia a vistas en tribunales y juzgados demuestra una excesiva reducción al modelo de abogacía contenciosa y de lo contencioso a lo judicial (ni una mención al arbitraje), además de resultar difícilmente viable el número de horas derivado de la proporción del 50%.

No hay ninguna referencia al arbitraje y a la mediación como, en general, a la abogacía no contenciosa.

Tampoco hay aquí ninguna previsión de convalidación de ningún tipo: ni horas de más, de carácter práctico, correspondientes al grado, ni de pasantías, ni de prácticas en otros cursos que pudieran ser incluso más acordes con la formación encaminada al ejercicio profesional.

Se propone el siguiente texto alternativo:

“Artículo 15. Programa de prácticas

1.- El programa de prácticas deberá tomar en consideración las materias obligatorias objeto de estudio.

2.- Podrán formar parte de las prácticas la asistencia a vistas en tribunales, juzgados y tribunales arbitrales, así como las sesiones en otras instituciones, públicas o privadas, vinculadas de alguna forma al ámbito jurídico, tanto en España como en el extranjero”

3.- El programa podrá establecer pautas y criterios de convalidación, medibles en créditos, siempre que no excedan de un tercio de los créditos totales correspondientes a las prácticas.

Artículo 16. Número máximo de alumnos.

La exigencia de que el número máximo de alumnos del que pueda ser tutor un abogado no exceda de dos puede no adecuarse a la realidad, en función del diseño global de las prácticas por los centros formativos y de las exigencias de especialización que no se han tenido en cuenta en ningún momento y que obligarían a contar con más de un tutor por alumno en formación. Debería poder convenirse con mayor libertad y no sólo por vía de excepción.

Ningún otro comentario o propuesta alternativa distinta de la supresión de que las necesidades prácticas a cubrir de las universidades sean “todas” las que demanden. Debe depender del Convenio.

Artículo 17. Mecanismos de control.

Ninguna propuesta alternativa, aunque el texto de borrador parece en exceso reglamentista.

[.....]

Artículo 19. Comisión mixta interministerial para la acreditación.

Aunque la composición de esta Comisión es coherente con su naturaleza “interministerial” y su ajenidad a los cursos de formación donde la abogacía institucional juega ya un papel,

parecería lógico alguna presencia mínima de abogados en ejercicio en la Comisión (sólo se habla de “juristas de reconocida competencia” en los nombrados por la Secretaría de Estado de Justicia) y alguna intervención en el proceso de designación a cargo del Consejo General de la Abogacía.

No se formula ninguna propuesta alternativa en concreto.

[.....]

Artículo 26. Procedimiento de determinación del contenido mínimo de la evaluación.

La evaluación única para todo el territorio nacional está en la Ley (la exigencia de que además sea “idéntica” no parece añadir nada) pero ello no es incompatible con que la prueba de evaluación contenga opciones que, dentro y fuera de las materias obligatorias, permitan modularla en razón de peculiaridades territoriales y, sobre todo, de especialidades, idea completamente ausente de todo el borrador de Reglamento. Máxime cuando existe el riesgo de que lo que no forme parte de la prueba desaparezca o se atenúe extraordinariamente en el proceso formativo previo.

Algo semejante sucede con la limitación de la evaluación a las materias obligatorias: si lo no obligatorio no forma parte de la prueba, ni siquiera opcionalmente para quien la realice, su valor quedará muy debilitado en la formación.

La conveniencia de aunar opción (sobre parte de la prueba) y una cierta especialización es muy evidente en el caso práctico, donde no habría ninguna dificultad para dar a elegir uno entre varios y ello permitiría combinar una mayor exigencia (en un área de especialidad) con la necesaria generalidad (y menor nivel de exigencia) de una primera prueba sobre la totalidad de un contenido obligatorio.

En general, la concepción de la primera prueba, unida a la de las “materias obligatorias” en este borrador de Reglamento, puede llevar a una síntesis o repaso repetitivo de los exámenes en el Grado de Derecho. La idea de que esa primera prueba consista en un *test* suscita muchas resistencias por su poca adecuación al derecho, en general y, todavía más, a la práctica del derecho, orientada al razonamiento y a la actuación.

Vuelve a no haber aquí ninguna referencia a la deontología profesional y el predominio de lo contencioso en la primera prueba carece de justificación, así como la referencia a la “*proporción adecuada a la importancia de cada orden jurisdiccional*”, que no sólo es

imposible de predeterminar sino que presupone la existencia de preguntas de todos los órdenes jurisdiccionales, donde no se sabe donde están los límites (Tribunal Constitucional, Tribunales no nacionales). Se propone hacer con la deontología profesional una prueba específica (segunda) y eliminatória, que podría compensar la ineficiencia de un *test* que parece más dirigido a evaluar masivamente un número alto de estudiantes, antes que a comprobar su capacitación.

No hay ninguna previsión sobre la expresión oral en la prueba correspondiente al caso práctico, lo que parece una exigencia esencial en la comprobación de la capacitación para el acceso a la profesión.

Se propone la siguiente alternativa:

“Artículo 26. Procedimiento de determinación del contenido mínimo de la evaluación.

1. La evaluación será única e idéntica para todo el territorio nacional en cada convocatoria, aunque pueda contener diversas opciones.

2. La determinación del contenido de la evaluación se realizará por la Secretaría de Estado de Justicia para cada convocatoria, teniendo en cuenta las propuestas realizadas por el Consejo de Universidades y el Consejo General de la Abogacía.

Estas propuestas deben dirigirse al Ministerio de Justicia en el plazo de 3 meses desde la realización de cada una de las pruebas de aptitud, para ser incluidas en la prueba correspondiente a la convocatoria siguiente

3. La prueba constará de tres ejercicios. El primero, en forma de test, versará sobre el contenido de la orden conjunta de los Ministerios de Justicia y de Ciencia e Innovación a la que se refiere el artículo 4 de este Reglamento. El segundo versará sobre deontología profesional. El tercero consistirá en la resolución durante cinco horas de un caso práctico, a elegir entre varios, relacionado con el ejercicio de la profesión de abogado que será objeto de exposición oral.

La forma de valoración será la fijada en la correspondiente orden de convocatoria.

4. La naturaleza y contenido de las preguntas y de los casos habrá de denotar la capacidad de análisis y de enfocar correctamente los problemas, la formación en competencias y habilidades propias de un abogado y el conocimiento práctico del Derecho para el adecuado ejercicio de la profesión.

5. La superación de la prueba de aptitud para el acceso a la profesión de abogado habilita automáticamente para el ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales”.

